

**PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN**  
CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común Sala I



En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, marzo de 2025, se reúnen en acuerdo los Sres. Vocales de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial, Dres. Laura A. David, Marcela Fabiana Ruiz y Álvaro Zamorano para conocer y decidir el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en los autos caratulados **"SANTILLAN MAXIMO FERNANDO c/ CHEVROLET S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)"- Expte. N° 4815/21.**

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la votación, el mismo dio el siguiente resultado: Dres. Álvaro Zamorano como vocal preopinante, Marcela Fabiana Ruiz como segunda vocal y Laura A. David como tercera vocal. Los Sres. Vocales se plantean las siguientes cuestiones: ¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA EN RECURSO? ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

**A la PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Vocal, Dr. ÁLVARO ZAMORANO, dijo:**

*I. Los recursos*

Vienen estos autos a conocimiento y decisión del Tribunal por los sendos recursos de apelación interpuestos y fundados en fecha 06/02/2024 por el letrado Patricio Torres, en representación del actor, y en fecha 16/02/2024 por los letrados Gladys Noemi Navas y Sebastián Casanova, en el carácter de apoderados de Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados SA y de Gemsa Automotores S.A., respectivamente, en contra de la sentencia n° 0010 dictada en fecha 14/12/2023 por el Juzgado Civil y Comercial Común de la IV° Nominación.

Por sentencia de fecha 14/12/2023, aquí apelada, el Juez de primera instancia resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Máximo Fernando Santillán contra Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados y Gemsa Automotores S.A, condenando a las demandadas a: a) hacer entrega de un vehículo Chevrolet ONIX Plus 1.2 LS -u otro de similares características- de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato oportunamente celebrado, debiendo las demandadas presentar la documentación necesaria para que el actor pueda cumplir con los deberes a su cargo; b) abonar una indemnización de \$257.890 (pesos doscientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa) en concepto de daño moral y privación de uso (punto I). Asimismo, dispuso aplicar a ambas demandadas la sanción prevista en el art. 52 bis de la Ley N° 24.240, fijándola en el valor equivalente a 2 canastas básicas totales para el hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) a cargo de Gemsa Automotores S.A. y de 10 canastas básicas a cargo de Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Todo ello con más intereses en la forma considerada.

Por otro lado, condena a Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados a abonar la multa prevista en la cláusula 18.8 del contrato de adhesión N° 1104656, debiendo presentar planilla -dentro del plazo previsto- indicando el valor vigente del vehículo.

Finalmente, impuso las costas a las demandadas por los rubros que prosperaron y al actor por el que fue rechazado y reservó la regulación de honorarios para su oportunidad.

Corrido el traslado de ley, contestan las partes (cf. presentaciones de fecha 27/02/2024, 06/03/2024 y 07/03/2024). Consta que el 15/04/2024 se pronuncia la Sra. Fiscal de Cámara, en los términos de su dictamen. Por providencia del 17/04/2024 pasa el expediente a despacho para resolver (cf. lo dispuesto por providencia de fecha 19/03/2024), quedando en estado de emitir pronunciamiento.

## *II. Los agravios*

### *a) Del actor*

Le agravian las costas del proceso impuestas por la sentencia en recurso, por tres motivos: a) No haberse discriminado que se trata de una acción compleja que incluye una primera acción de cumplimiento contractual, que prosperó en un 100%, y una segunda por los daños y perjuicios provocados, que también prosperó en su totalidad si se tiene en cuenta que la accionada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados fue condenada por la multa contractual; b) Haberse impuesto las costas por el rubro que no prosperó, sin especificar en qué porcentaje se condena a su parte; y c) No haber dicho nada respecto al apercibimiento decretado en autos a la perito Julieta Albornoz.

### *b) De Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados S.A.*

Se agravia, en primer lugar, por la falta de fundamentación y arbitrariedad de la sentencia de grado, que tornaría nulo su pronunciamiento. En este sentido, considera improcedente la remisión que hace el juez de grado en oportunidad de resolver sobre el fondo de la cuestión - incumplimiento de entrega del bien adjudicado- a lo resuelto por la Excma. Cámara en el marco del incidente cautelar, limitándose a efectuar una síntesis de lo allí acontecido en vez de analizar las constancias probatorias de la causa a fin de fundar su decisión, contraviniendo así los cánones que la actividad jurisdiccional debe respetar.

Señala que, conforme lo dictaminado por la perito contadora, el actor no suscribió la aceptación de adjudicación ni tampoco diligenció los trámites relativos al pedido de la unidad ya que se encontraba adeudando al mes de Julio del 2021 el equivalente restante en concepto de saldo de medida cautelar imputada a las cuotas 21 a 58. Indica que la aceptación de la adjudicación no se perfeccionó a raíz de la negativa del Sr. Santillán de pagar los saldos cautelares, no habiendo firmado la aceptación de la unidad ni el pedido del vehículo a fábrica, formularios que no implican un dislate de las obligaciones, como erróneamente sostiene el a-quo en la sentencia, en tanto allí se elige el vehículo

(pudiendo optar por el adjudicado o cambiar de modelo) y el color. Entiende que lo que debía resolver el Juez de grado en el caso era si Chevrolet había infringido el contrato al exigir el pago de los saldos cautelares en forma previa a la entrega de la unidad.

En el supuesto de no prosperar el agravio precedente, cuestiona la sentencia de grado en cuanto condena a su parte a abonar al actor la multa por demora prevista en los términos de la cláusula N° 18 de la Solicitud de adhesión, una vez se encuentre practicada la planilla con el valor del bien tipo. Al respecto, le agravia la interpretación del juez de grado en relación a que la intimación formulada vía carta documento pueda ser considerada como una aceptación de la adjudicación, en tanto su envío no prueba que se haya cumplido con los requisitos exigidos por el art. 14 de la SDA para que se pueda avanzar con la entrega del auto.

Reitera que la adjudicación no se perfeccionó atento a que el Sr. Santillán se negó a pagar los saldos cautelares, siendo esa deuda la que impedía a Chevrolet la entrega del vehículo. Y, por ende, al no estar Chevrolet obligada a la entrega del vehículo, entiende que de ningún modo se la puede condenar a pagar la referida multa.

A su vez, para el caso de confirmarse la aplicación de la multa prevista en las condiciones generales, señala que la misma conlleva la revocación de la indemnización mandada pagar por los otros rubros (daño moral, daño punitivo y privación de uso), no resultando eficaz su aplicación conjunta de conformidad con lo normado por el art. 793 CCCN.

Seguidamente, critica la condena impuesta por el a quo en concepto de privación de uso, la que estima arbitraria e improcedente por no haber incurrido su parte en incumplimiento alguno (cf. agravios ya referenciados) ni surgir de constancias de la causa prueba alguna que acredite de manera inequívoca la supuesta privación alegada por el actor y menos aún la procedencia de la cuantía reclamada. Agrega que, si bien se reclama "privación de uso", ningún vehículo se encuentra exento de gastos (combustible, aceites, estacionamientos, mantenimiento diario, peajes, etc...), los que disminuyen notablemente la importancia indemnizatoria del rubro en análisis y cuya sumatoria duplica sin lugar a dudas los gastos que podrían realizarse en transporte público.

Por otro lado, se agravia de la condena en concepto de daño moral impuesta por el juez a-quo con fundamento en un conjunto de extractos doctrinales y jurisprudenciales, sin remitirse a prueba alguna y sin siquiera explicitar los motivos por los cuales su parte resulta responsable por el rubro.

Finalmente, le agravia la sentencia de grado en cuanto la condena a abonar al actor el equivalente a 10 canastas básicas (equivalente a \$4.957.983,2), superando ampliamente lo peticionado en la demanda (\$800.000), tornando a la sanción impuesta exorbitante y abusiva. De otro lado, sostiene que en el caso no se encuentran cumplidos los extremos exigidos para la procedencia del daño punitivo, no habiendo incumplido Chevrolet ninguna norma de

la Ley 24.240.

*c) De Gemsa Automotores S.A.*

En primer lugar, se agravia de la sentencia recurrida por cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por su parte tomando como argumento que en la entrega de la unidad el rol de la Concesionaria es preponderante.

Arguye que Gemsa Automotores S.A. no intervino en forma alguna con el actor, salvo la suscripción del plan y los trámites para la adjudicación del bien, que fue rechazada en forma arbitraria y sin consulta por la codemandada Chevrolet aduciendo una deuda del actor en su plan de ahorro debido a una cautelar, sin tener su parte injerencia alguna en esa decisión y sin posibilidad de mediar ante la administradora para la entrega de la unidad, siendo una decisión exclusiva y excluyente de aquella.

Entiende que en el caso resulta aplicable la eximente prevista en el art. 40 LDC, que reza: "... solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena ...", resultando más que claro que Gemsa Automotores S.A. es totalmente ajeno a la supuesta causa del daño esgrimido por el actor. Indica que no existió trato indigno ni conducta antijurídica de su parte que causara daños al actor, así como tampoco factor objetivo que justifiquen su responsabilidad solidaria.

En segundo lugar, se agravia de la sentencia en crisis por cuanto obliga a Gemsa Automotores S.A. a la entrega del vehículo contratado en el plan de ahorros por el actor, cuando ello le corresponde sólo y exclusivamente a la codemandada Chevrolet como administradora del plan. Advierte que los vehículos adquiridos por planes de ahorro llegan a la Concesionaria para su entrega ya facturados a nombre de los suscriptores y en ese caso lo que corresponde hacer a Gemsa Automotores S.A. es la entrega y el patentamiento de la unidad.

En tercer lugar, se agravia de la condena a abonar la suma de \$257.890 por daños y perjuicios de manera totalmente infundada, en tanto no han sido acreditados por el actor.

Reitera que no hubo incumplimiento alguno de su parte, toda vez que el actor se encontraba en mora al momento de la adjudicación del plan y no quiso saldar la deuda a los efectos de poder hacer entrega de la unidad.

En lo tocante al daño moral alegado las codemandadas recurrentes señalan que, tratándose de un supuesto de responsabilidad contractual, la obligación de su reparación no surge acredita por el sólo hecho de la acción antijurídica sino que requiere una demostración fehaciente de su existencia, y en autos no ha sido objeto de prueba concreta.

Cuestiona la aplicación de la sanción prevista en el art. 52 LDC por un total de 12 canasta básicas (entre las dos codemandadas), que a la fecha constituye un monto irrisoriamente superior al solicitado por el actor, fallando el Juez a quo ultrapetita. Sostiene que, al no tener injerencia Gemsa en los

planes de ahorros ni ser la administradora del plan, la multa impuesta no tendrá el fin perseguido por el Legislador de prevenir o evitar este tipo de evaluaciones económicas.

Por último, se agravia de la imposición de costas en proporción al éxito objetivo por las partes y sin tener en cuenta que el actor estaba en mora, por lo que la demanda incoada resultaba a todas luces injustificada.

### *III. La solución*

#### *(i) Cuestiones no controvertidas*

Ingresando al tratamiento de los recursos interpuestos, en forma preliminar, se advierte que no se encuentra controvertido que el actor suscribió en fecha 22/03/2018, por intermedio de la concesionaria codemandada Gamsa Automotores S.A., un contrato de ahorro previo administrado por Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados (Solicitud de Adhesión n° 01104656) correspondiente al Grupo n° 004401 Orden n° 52 para la adquisición de un automóvil Chevrolet Prisma 4P 1.4 NLT M/T, que luego fue cambiado a un modelo Chevrolet Onix Plus 1.2. LS, y que resultó adjudicatario en virtud del sorteo realizado en julio de 2021. Asimismo, llega firme a esta instancia la falta de entrega del rodado en los términos pactados.

Por otro lado, tampoco resulta cuestionada la aplicación al caso del régimen tuitivo de la Ley de Defensa del Consumidor n° 24.240, conforme encuadre realizado por el Juez de primera instancia.

#### *(ii) Agravios relativos a la defensa de falta de legitimación pasiva.*

A poco de examinar las actuaciones, puede adelantarse la improcedencia del agravio relativo al rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por la codemandada Gamsa Automotores S.A.

En efecto, conforme lo precedentemente expuesto, en el caso no resulta un hecho controvertido la formalización de un plan de ahorro por parte del actor por intermedio de la concesionaria Gamsa Automotores S.A. y cuya administración se encomendó a Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados. Esta conclusión se desprende -a su vez- de la solicitud de adhesión al citado plan de ahorros celebrado entre el actor y Chevrolet, donde se indicó a Gamsa Automotores S.A. como agente y/o concesionario interviniente; encontrándose dicho instrumento suscripto/certificado por un representante de ésta concesionaria (cf. sellos aclaratorios allí estampados). Asimismo, del formulario de aceptación de adjudicación acompañado en fecha 25/07/2023 por Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados en el marco del incidente de medida cautelar correspondiente a estos actuados (Expte. n° 4881/15-I1), se consigna a Gamsa Automotores S.A. como “agente que realiza el proceso de adjudicación y entrega del bien”.

Ello hace que entre los intervinientes se generen distintas relaciones contractuales vinculadas entre sí en pos de un objetivo único, consistente en la adquisición de un vehículo por parte del actor, en una trama

compleja que excede los contratos individuales celebrados por cada adherente, que no puede ser soslayada a la hora de interpretar los contratos celebrados.

Es que en esta clase de negocios se presenta claro el fenómeno de conexidad contractual (prevista de modo expreso en los arts. 1073 y 1074 CCCN), que supera el clásico principio de relatividad de los contratos y permite extender solidariamente la responsabilidad ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de repetición que entre sí pudiesen promover los sujetos vinculados. Los planes de ahorro previo para fines determinados exteriorizan un esquema apoyado en vínculos contractuales fuertemente relacionados entre sí, a tal punto que el éxito de la operatoria requiere, imprescindiblemente, que todos ellos sean celebrados, so riesgo de ponerse en peligro la suerte de todo el negocio, dirigido en conjunto a generar un sistema de autofinanciación para comercializar determinados productos en el mercado, cuya adquisición es promovida por las empresas relacionadas a través de ese objetivo. Es el nexo funcional entre las distintas empresas económicas, el que permite la expansión de la responsabilidad de quienes concurren a integrar la organización económica, obteniendo los beneficios. En tal sentido se ha dicho que “Producto de ese tráfico comercial, se vislumbra conformado por las sociedades anónimas aludidas un bloque indisoluble frente al consumidor, sin perjuicio que cada convención empresarial conserve dentro del diseño y entre ellas su autonomía funcional. Las une una causa fin común que justifica -en suma- su existencia y que puede hacer nacer vasos comunicantes entre ellos en materia de responsabilidad” (cf. CNCom., Sala, 07/07/2017, voto del Dr. Kölliker Frers, en “Silvano, Sergio F. y otro c. Lua Seguros La Porteña SA y otro s/ ordinario”; cc. CCCCTuc., Sala III, autos “Cisneros, Julia Inés vs. Círculo de Inversores S.A. Para fines determinados y/o s/ Sumarísimo (Residual), sentencia del ...)(“ Expte. n° 1321/16 ).

La sentencia de grado determinó que la demandada -Gemsa Automotores S.A.- ha reconocido el rol que ha cumplido en el caso así como la negativa a entregar el bien por la administradora alegando la mora del actor, en la cual la concesionaria asume un rol preponderante. A partir de ello, sumado a su carácter de proveedor y la cadena de comercialización en la que intervino, el sentenciante define la suerte adversa de la defensa esgrimida.

En sus agravios, Gemsa Automotores S.A. sostuvo no haber tenido injerencia ni posibilidad de mediación en la decisión de rechazar la entrega de la unidad, la que habría sido adoptada en forma exclusiva y excluyente por la administradora codemandada con motivo de una deuda del actor en su plan de ahorro debido a una cautelar; pretendiendo con ello desligarse de responsabilidad en los términos de la eximente prevista por el art. 40 LDC. Sin embargo, lo dicho acerca de la naturaleza de los vínculos contractuales asumidos y la consecuente responsabilidad solidaria que le cabe no ha sido desvirtuada en este caso.

No puede ignorarse que en este marco de relaciones contractuales, los consumidores adherentes al plan de ahorros depositan su confianza en la marca del vehículo y en las agencias que suelen presentarse

como agentes de captación de adherentes interesados en adquirir un vehículo de la marca de que se trate, y muchas veces ignoran el complejo funcionamiento interno de estas operaciones comerciales. Lo dicho, sin perder de vista que en los contratos de ahorro previo la capacidad de negociación del consumidor se ve claramente restringida, pues sólo le es dado optar entre las alternativas que se le ofrecen de manera unilateral por la administradora del plan y/su intermediaria; hecho revelador de la asimetría de las partes, siendo el predisponente quien se encuentra en una posición de privilegio frente al suscriptor.

A partir de esa situación de confianza, el consumidor que es captado por una oferta contractual determinada no puede cargar con las contradicciones o desavenencias que puedan existir entre los proveedores, pues en el equilibrio consumeril debe primar la tutela de los intereses de la parte más débil de la relación. Por el contrario, en armonía con la defensa de sus derechos de base constitucional (cf. art. 42 CN), son las empresas las que deben extremar su coordinación empresarial y -si ello no se logra- asumir las consecuencias que con tal desentendimiento originen.

Por lo demás, los hechos de la causa indican que el comportamiento de ambas codemandadas exhibió ante el consumidor la apariencia de que ellas -administradora y concesionaria- respondían por la entrega de la cosa y, en general, por el cumplimiento del contrato de ahorro para la adquisición del vehículo. Esa apariencia las hace solidariamente responsables, porque el actor pudo legítimamente creer que estaba vinculado con dos obligados conjuntos de un mismo negocio. Se ha dicho al respecto que “Ninguno de los dos recurrentes puede desligarse de la responsabilidad ante quien depositó confianza en la apariencia que representaba, aunque no exista un deliberado propósito de inducir a error. La atribución de la responsabilidad así alcanza a todos aquellos que hayan intervenido en la organización y funcionamiento del contrato” (cf. Cámara de Apelaciones en lo Civ. y Com. de Salta, Sala IV, “Sahad, Eduardo Sebastián c. Fadua S.A.; Fca S.A. de Ahorro Para Fines Determinados s/ acciones ley de defensa del consumidor • 07/02/2022. Cita: TR LALEY AR/JUR/65170/2022).

En definitiva, ponderando que en el caso, frente al Sr. Santillán, ambas codemandadas se presentaron como co-contratantes, más allá del rol asumido por cada una en el incumplimiento obligacional objeto de autos, deben responder frente al actor como sujetos que integran la cadena de comercialización (cf. art. 40 LDC). Extremo éste -participación en la cadena de consumo- que fue admitido por el representante de la concesionaria aquí recurrente en oportunidad de comparecer a absolver posiciones en el marco de la audiencia celebrada en fecha 27/02/2023 (véase la respuesta a la posición n° 15 del pliego).

Por lo expuesto, se rechaza el presente agravio y se confirma la sentencia de instancia en cuanto desestima la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por la codemandada Gemsa Automotores S.A.

*(iii) Agravios relativos al incumplimiento contractual de entregar el bien adjudicado*

De la reseña efectuada, se observa que la

codemandada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados se agravia -en primer lugar- por la falta de fundamentación y arbitrariedad de la sentencia de grado al resolver el eje central de la pretensión del actor, relativa a la entrega del bien adjudicado. Critica, en especial, la remisión que realiza el Juez de grado a lo resuelto por esta Alzada en el marco del incidente cautelar en lugar de fundar su decisión en el análisis de las constancias probatorias de la causa.

Abordando su tratamiento se observa que, efectivamente, la sentencia en recurso tuvo en consideración el análisis realizado por esta Sala I de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común en resolución n° 75 de fecha 14/03/2023 (Expte. n° 4815/21-I1), que ordena a las demandadas cumplir con la entrega del vehículo Chevrolet ONIX Plus 1.2 LS -u otro de similares características- al Sr. Máximo Fernando Santillán, debiendo ambas partes ajustarse estrictamente a las condiciones establecidas en el contrato oportunamente celebrado, sin exigirle el pago en esa oportunidad de las sumas diferidas por la cautelar dictada en el proceso colectivo “Defensor del Pueblo de Tucumán c/ Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ sumarísimo (residual)” (Expte. n° 2702/19 - I2), y sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva a dictarse. A partir de ello, advirtiendo que se mantienen en el caso las circunstancias que motivaron el resultado de la medida de tutela anticipada dictada en autos, el Juez a quo condenó a las demandadas a la entrega del automóvil correspondiente.

Por otro lado, para así resolver, la sentencia en recurso estimó no esencial, innecesario y/o superfluo el formulario denominado “aceptación de adjudicación” cuya suscripción invocó la administradora del plan de ahorro como requisito previo a la entrega de la unidad adjudicada (cf. Cláusula 14.2.3. de las Condiciones Generales de contratación). En este sentido, el a quo advierte -por un lado- que el referido formulario alude a cuestiones accesorias (como elección de color, datos de facturación y lugar de entrega), así como que el ejemplar acompañado por la demandada en autos (cf. escrito ingresado en fecha 25/07/2023 en Expte. n° 4815/21-I1) refiere a otro sorteo realizado en fecha posterior (11/10/2022) al del actor (08/07/2021); y -por otro- que el Sr. Santillán ya había manifestado su aceptación mediante Carta Documento (CD 902906622) entregada a la administradora en fecha 10/08/2021, habiendo sido ello -a su vez- admitido por la accionada al contestar demanda, más aún luego de iniciada la presente demanda y existiendo una orden judicial. De igual manera, observa el sentenciante que la suscripción de dicho formulario implicaría una nueva dilación de la entrega, en tanto el actor estaría consintiendo un plazo de 50 días hábiles desde su firma, lo que se contraponen con la manda judicial que expresamente otorgó diez días hábiles a tal fin. Interpretación que también agravia a la administradora del plan recurrente.

Sentado ello, adelanto que el exámen de las constancias de la causa a partir de los agravios expuestos por la demandada Chevrolet S.A. De Ahorros Para Fines Determinados, no hace más que confirmar la conclusión arribada por el Juez de instancia y determina la improcedencia del



presente cuestionamiento.

Me explico. El actor ofreció como prueba de su derecho -entre otras- copia del contrato de adhesión base de la acción (coincidente con el ejemplar acompañado por Chevrolet al contestar demanda), de cuyas Condiciones Generales -Cláusula 14- surgen las obligaciones de las partes contratantes, a saber: Cláusula 14.1.2. que estipula a cargo de la administradora: “Poner a disposición del Suscriptor Adjudicatario el Bien tipo adjudicado, dentro de los 50 (cincuenta) días hábiles contados desde la fecha de aceptación de la adjudicación que efectúe el Suscriptor Adjudicatario, siempre que éste cumpla con los demás requisitos establecidos en las presentes Condiciones Generales...”; y Cláusula 14.1.4: “La administradora se responsabiliza de la entrega del Bien Tipo en forma”.

Por su parte, la Cláusula 14.2.1. pone a cargo del suscriptor adjudicatario: “Pagar el Derecho de Adjudicación o la parte proporcional en caso de prorrateo para el pago del Derecho de Adjudicación dentro de los 15 (quince) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la notificación mencionada en el ítem 10.3.”; Cláusula 14.2.2: “Retirar el Bien adjudicado dentro de los 30 (treinta) días corridos a contar desde la fecha en la que se lo notifique fehacientemente que aquel se encuentra a su disposición”; y Cláusula 14.2.3: “El Suscriptor Adjudicado podrá retirar el Bien adjudicado previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Haber abonado el Derecho de Adjudicación y hallarse al día con los pagos correspondientes a la Administración; b) Abonar todo gravamen, patente y/o tributo que las disposiciones legales le impongan con relación a la compra y habilitación del Bien Tipo...; c) Suscribir por el total de las Cuotas Mensuales a vencer impagas, la garantía real de prenda, a favor de la Administradora abonando las erogaciones necesarias que originen su constitución e inscripción; d) Ofrecer en todos los casos, antes de retirar el Bien adjudicado y cualquiera sea el monto de la Cuotas Puras pagadas, codeudores y/o fiadores solidarios...; e) Abonar cualquier adicional que hubiera solicitado especialmente el Suscriptor Adjudicatario, cuyo valor no se halle incluido en el monto de la Cuota Mensual; f) Contratar y pagar un seguro que cubra los riesgos asegurables del Bien...; g) Abonar todos los impuestos...que recaigan sobre el Bien adjudicado; h) Abonar el flete...y demás gastos ocasionados por el transporte del Bien adjudicado...; i) Contratar y abonar un seguros de transporte del Bien adjudicado desde la terminal y hasta el sitio donde deba efectivizar la entrega....”.

La administradora recurrente, al contestar demanda, reconoció que “...el cliente tenía la intención de adjudicar el vehículo por lo que era menester que abonara el saldo adeudado por medida cautelar” (cf. punto II. de su escrito de responde). En este sentido arguye que el actor no cumplimentó lo exigido por el art. 14.2. de la SDA, por no estar al día en el pago de las cuotas mensuales. Asimismo, evidencia que la medida cautelar dictada en el marco del proceso colectivo en ningún momento ordena que se entreguen los vehículos a quienes han pagado en los términos de dicha manda judicial, por lo que no es dable interpretar que hubo incumplimiento de su parte al exigir al actor ponerse al día en el

pago de las cuotas para retirar el vehículo. Por último, advierte que la cautelar fue dejada sin efecto por la Excm. Cámara Civil y Comercial, Sala III, siendo ésta última resolución confirmada luego por la CSJT (cf. punto IV.II. del mismo escrito).

Esta Sala I, al resolver el recurso de apelación interpuesto en el marco del incidente cautelar promovido en autos, tuvo oportunidad de analizar el alcance de la medida cautelar dictada en el juicio “Defensor del Pueblo de Tucumán c/ Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ sumarísimo (residual)”, Expte. n° 2702/19 - I2, en relación al diferimiento parcial de las cuotas que se abonaban en los planes de ahorros; posteriormente dejada sin efecto por sentencia del 12/03/2021 de la Sala III de esta Excm. Cámara, luego confirmada por sentencia n° 725 del 14/06/2022 de la CSJT, y concedido el recurso extraordinario federal interpuesto en su contra por sentencia n° 1374 del 01/11/2022. En dicha resolución de fecha 14/03/2023, este Tribunal tuvo en consideración que “el actor habría resultado adjudicatario del vehículo el 08/07/2021, es decir, durante la vigencia de la medida cautelar dictada en la acción colectiva antes mencionada, puesto que aún no había adquirido firmeza la resolución revocatoria, o dicho de otro modo, la resolución última que disponía su revocación, no había sido pronunciada. Así las cosas, la satisfacción de las obligaciones a que se refiere el art. 14.2.3 del contrato que vincula a las partes no pudo incluir las diferencias originadas en el diferimiento de cuotas dispuestas por la medida cautelar referida, y -previa satisfacción de los demás requisitos allí enumerados- debió la demandada proceder a entregar el vehículo adjudicado, sin exigir al actor el pago de diferencia alguna las que se hallaban justificadas -no debidas a ese momento- en la referida cautelar, la que si bien no ordenaba que se entreguen los vehículos a quienes hubieran pagado en los términos de dicha manda judicial, tampoco lo prohibía, siendo el sentido de la misma conceder los efectos propios del pago a las sumas así abonadas, al menos hasta tanto recayera sentencia definitiva, sin que pueda afirmarse que quien se encontraba pagando las cuotas en los términos de la cautelar se hallara incurso en incumplimiento; antes bien, se hallaba bajo el amparo de la misma”. Consideraciones que fueron acogidas por el Juez de grado y que el Tribunal ratifica en esta instancia recursiva.

A mayor abundamiento, tengo que la solución adoptada resulta conteste con el régimen de diferimiento parcial del pago de las cuotas de planes de ahorro previo bajo la modalidad de grupos cerrado reglamentado por la Inspección General de Justicia mediante Resolución n° 14/2020 del 10/04/2020 -y sus posteriores prórrogas- teniendo en consideración el contexto de emergencia atravesada por nuestro país, vigente al configurarse el conflicto de autos (cf. Resoluciones n° 5/2021 del 19/04/21 BO 20/04/21 y n° 11/2021 del 19/08/21 BO del 20/08/21). En lo que aquí interesa, tal resolución prevé que: “El recupero de los montos correspondientes a los porcentajes de cuotas diferidos, se hará por los suscriptores mediante el pago de hasta un máximo de doce (12) cuotas una vez finalizado el plan de ahorro, las que tendrán carácter de cuotas suplementarias. El monto de ninguna de ellas podrá exceder el de una (1) cuota – alícuota + carga administrativa-” (cf. art. 5°).

Siguiendo con el análisis del caso, surge de constancias del expediente que el actor remitió carta documento (CD902906622) a la administradora del plan Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados, impuesta el 05/08/2021 y entregada el 10/08/2021 (cf. informe producido por el Correo Argentino en fecha 01/12/2022), intimándola en forma clara y contundente a: “Aceptar a quien suscribe en el plazo de 24 horas como suscriptor adjudicatario (por haber salido beneficiario del acto de adjudicación de fecha 08/02/2021 como del cumplimiento de las pautas del contrato), y poner a disposición el bien tipo adjudicado conforme cláusula n° 14.1.2. del contrato de adhesión n° 1104656. Dicha aceptación la realiza por este acto por las maniobras que intentó hacer la concesionaria Gemsa Automotores S.A. Tucuman en busca de que firme cláusulas conexas como inducir al pago de un monto de cuatrocientos treinta y seis mil pesos (\$436.000) sin haberme discriminado con una planilla a tal efecto como su su verdadero origen”.

Siendo dable inferir, que la falta de suscripción del formulario de aceptación invocado como defensa por la administradora para justificar la falta de entrega del bien resulta -en definitiva- imputable a exigencias injustificadas de su parte (cf. lo hasta aquí considerado), que impidieron al actor avanzar en el cumplimiento de sus propias obligaciones contractuales (cf. Cláusula 14.2. ya referenciada), viéndose obligado a manifestar su aceptación por otras vías igualmente fehacientes. No pudiendo la accionada desconocer tal expresión de aceptación alegando que el actor no presentó el respectivo formulario, que debía ser provisto por ella y cuya firma devino -a la postre- inaccesible y/o imposible de concretar para el suscriptor adjudicatario a causa del accionar injustificado, abusivo y hasta extorsivo de las proveedoras, dada su situación predominante en la relación de consumo. Todo ello conforme a lo resuelto por el Juez de grado.

Abundando en las consideraciones, tampoco se advierte de las pruebas producidas que la administradora, luego de recibir tal misiva por la que toma conocimiento fehaciente de la intención de adjudicar el vehículo por parte del suscriptor sorteado, haya contestado y/o notificado y/o intimado al actor (cf. procedimientos previstos en el art. 4 de las Condiciones Generales de contratación) a fin de cumplimentar con las formalidades y requisitos contractuales que reputa indispensables a los fines de poder cumplir con su obligación esencial de entregar el bien contratado. Por su parte, Gemsa Automotores S.A. rechaza la carta documento recepcionada, informando que “...ha agotado toda las instancias administrativas que nos corresponde realizar, por lo cual le solicitamos dirigirse a Chevrolet S.A. de Ahorro Para Fines Determinados...quien es el único habilitado para dar una solución a vuestro inconveniente...”. Actitud pasiva que no es dable esperar de las accionadas, en su calidad de administradora y concesionaria, quienes -por el contrario- deben dirigir una acción rápida y eficaz para avanzar y culminar el proceso de adjudicación del bien. Desde esta perspectiva, en el caso adquiere relevancia la presunción resultante del silencio de las demandadas, quienes no respondieron la carta documento -administradora- o lo hicieron de manera evasiva -concesionaria- por la cual el actor las intimó -entre

otras- a “aceptarlo” como suscriptor adjudicatario.

Por lo demás, observo que la pericial contable producida en autos (informe agregado en fecha 16/07/2023) resulta inconducente para dirimir el presente agravio, en tanto los extremos allí constatados e invocados por la aquí recurrente relativos a que “el actor no suscribió la aceptación de adjudicación ni tampoco diligenció los trámites relativos al pedido de la unidad ya que se encontraba adeudando al mes de Julio del 2021 el equivalente restante en concepto de saldo de medida cautelar imputada a las cuotas 21 a 58” (cf. respuesta dada en los punto g y h del informe), no resultan en el caso controvertidos, girando la cuestión en torno a la exigibilidad de dichos saldos deudores como requisito previo a la entrega del vehículo (cf. lo hasta aquí analizado y resuelto).

Por todo lo considerado, se rechazan los agravios basados en la pretendida falta de cumplimiento de sus obligaciones por el actor y se confirma la sentencia de instancia en cuanto tuvo por acreditado el incumplimiento contractual de las demandadas.

En este punto cabe precisar que el Juez de grado fundamentó debidamente sus conclusiones en las constancias de la causa, más allá de compartir y hacer suyas las consideraciones de este Tribunal sobre cuestiones ya analizadas en forma anticipada pero que mantuvieron vigencia en oportunidad de resolver el fondo del asunto, por lo que no evidencio justificada la nulidad alegada por la recurrente basada en su disconformidad con tales remisiones.

*(iv) Agravios sobre la aplicación de la multa contractual*

Agravia, asimismo, a Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados la multa aplicada por la sentencia de grado en los términos de la Cláusula n° 18 de la Solicitud de Adhesión, cuestionando específicamente la interpretación que el juez de grado hace de la intimación formulada vía carta documento, en tanto su envío no prueba el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Cláusula 14 de la SDA para que se pueda avanzar con la entrega del auto.

Como consecuencia de lo considerado y resuelto en el punto precedente en torno a la ausencia de incumplimiento contractual imputable al actor, compartimos el criterio expuesto en la sentencia de mérito, corresponde igualmente el rechazo del presente agravio. No habiendo, por lo demás, la recurrente aportado otros elementos que desvirtúen la conclusión arribada por el Juez de instancia en oportunidad de resolver la aplicación de la multa contractual a las accionadas.

*(v) Agravios sobre la condena de daños y perjuicios*

Corresponde seguidamente examinar los agravios de las partes dirigidos a impugnar el reconocimiento y la cuantía de los distintos rubros reclamados por el actor.

En primer término, se adelanta que el agravio de Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados relativo a que la aplicación

de la multa contractualmente prevista por retardo en la adjudicación conlleva la revocación de la indemnización mandada pagar por los otros rubros (daño moral, daño punitivo y privación de uso) de conformidad con lo previsto por el art. 793 CCCN, resulta parcialmente procedente respecto de la condena por privación de uso.

Al respecto, se comparte la afirmación jurisprudencial conforme la cual se ha sostenido: “Como se ha visto, el plexo contractual del caso incluye una cláusula penal cuya función es indemnizar el daño que para el adjudicatario deriva de la demora injustificada en la entrega del vehículo. Es decir, la pena pactada aprehende exactamente la consecuencia dañosa de que aquí se trata, pues la privación de uso reclamada se refiere, precisamente, al perjuicio que nace de la indisponibilidad del rodado por parte de quien tenía derecho a su oportuna entrega. Frente a ello, conceder una indemnización por privación de uso implicaría desconocer una de las características esenciales de este tipo de cláusulas, las que, en definitiva, comportan una predeterminación convencional del perjuicio, de modo que, entonces, por ella se suple la indemnización de los daños sufridos por el acreedor, quien no tiene derecho a otra reparación distinta, aunque pruebe que la pena no es suficiente (arts. 655 y 656 del Código Civil; art. 793 del Código Civil y Comercial de la Nación; Llambías, J., ob. cit., t. I, p. 420, n° 316 y p. 429, n° 321; Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2006, t. 2-A, p. 552; Lorenzetti, R., Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Buenos Aires – Santa Fe, t. V, p. 229; Alterini, J., Código Civil y Comercial Comentado – Tratado Exegético, Buenos Aires, 2015, t. IV, p. 252) (cf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala D, Sentencia del 09/09/2019).

En consecuencia, corresponde receptar parcialmente el recurso en este punto y dejar sin efecto la indemnización autónoma del rubro privación de uso. Una solución contraria implicaría reconocer un enriquecimiento sin causa a favor del actor y a expensas de las accionadas (cf. art. 1794 CCCN).

Con iguales fundamentos, Chevrolet rechaza la condena indemnizatoria por daño moral, alegando -a su vez- ambas codemandadas que el actor no produjo prueba alguna sobre su existencia.

Se ha dicho que “...cuando la cláusula penal se pacta en el marco de una relación de consumo, o bien en el de un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, la cuestión debe valorarse a la luz de lo dispuesto por las normas privativas de tal situación. Ello en razón de que nos encontramos frente a una relación de consumo amparada por el art. 42 de la CN, Ley 24240 y disposiciones concordantes del CCyCN, las cuales interpretadas en armonía y en virtud de un correcto diálogo de fuentes lucen todas ellas aplicables al contrato de ahorro previo celebrado por las partes en el presente caso. Por lo tanto la pretensión de la agraviada en cuanto a considerar que la aplicación de la cláusula penal excluye el resto de las indemnizaciones que pudiera reclamar la parte actora luce totalmente inadmisible y contrario al sentido proteccionista que nuestra

Constitución Nacional y régimen consumeril otorgan al actor... Todo ello debe interpretarse armoniosamente con el resto de los microsistemas subsistentes del derecho privado, junto a la LDC y al nuevo CCyCN (arts. 7, 985, y ss., 1092, 1093, 1094, 1095, 1096 y ss., 1117, 1118, 1119, 1122 ss. y cctes.)' (CCCC Concepción Sala 2, Sentencia n° 183 del 11/08/2023 "Olas Layla Luciana Soledad c/ Volkswagen SA de ahorro para fines determinados y otro s/ contratos"). Bien interpretada la cláusula penal no indemniza otra cosa que la privación de uso del bien tipo del contrato de plan de ahorros por el retardo en el cumplimiento, pero no otros daños (v. gr. el daño moral o los daños punitivos)" (cf. CCCC, Sala 3 "Elias Sebastian Ezequiel Vs. Volkswagen S.A. De Ahorro Para Fines Determinados Y Otra S/ Sumario (Residual)" Expte. N° 4108/21, Sent. N° 602 del 31/10/2024, SAIJ: FA19130836).

Sentado ello, corresponde recordar que el daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos, esto es, cuando el agravio incide en las afecciones legítimas: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares y que su reparación tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio, pues se procura establecer una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del daño moral sufrido (conf. Zavala de González, M., "Cuánto por daño moral", La Ley 1998-E-1057).

Ahora bien y contrariamente a lo sostenido por las demandadas, cabe precisar que la procedencia de esta especie de daño no sólo resulta de prueba directa, toda vez que cabe tenerlo por configurado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil", t. I, p. 331). El art. 1744 CCCN consagra normativamente la posibilidad de que se tenga por acreditado el daño extrapatrimonial, cuando surja notorio de los propios hechos. Ello sucede en la especie, dado que, por su propia naturaleza, los sucesos vividos por el actor durante la vigencia de la relación contractual con las demandadas y también con posterioridad se muestran idóneos para provocarle angustia y desazón, constitutivas de daño moral.

En muchos casos no se cuenta con prueba directa de esta especie de perjuicio; lo que no impide valorar los elementos existentes -aún indiciarios- que puedan converger para tener por cierto que el incumplimiento y en general, la conducta asumida por las demandadas han sido idóneas para ocasionar un perjuicio de esta naturaleza. En efecto, el consumidor debió gestionar en distintas oportunidades el cumplimiento del contrato, efectuando diversos reclamos, algunos de los cuales ni siquiera merecieron respuesta oportuna de las aquí recurrentes, y agotando instancias conciliadoras previas a la interposición de la demanda de autos, para finalmente ver frustrado el objeto de la contratación y defraudada la confianza depositada en reconocidas empresas del medio (cf. experiencia común). Todo lo cual razonablemente hubo de ocasionarle perturbaciones que exceden las vicisitudes propias del negocio comercial celebrado,

causándole zozobra e intranquilidades, que deben ser reparadas.

En este sentido resolvió el Juez de grado, al decir: “A partir de la prueba producida en el expediente, puede concluirse que la parte actora ha visto frustradas las legítimas expectativas que tuvo en cuenta al contratar el plan de ahorro. Por ello, es dable inferir las angustias y trastornos motivados por la pasividad e indiferencia que demostró la parte accionada, el peregrinar al que fue sometida, y las gestiones que tuvo que realizar, los reclamos y la denuncia ante la DCI, lo que, por sí, es también demostrativo de la desidia con que se condujeron las demandadas. Así, en el caso no es necesaria prueba específica, ya que concurren los elementos que autorizan a presumirlo”.

Recuérdese que el trato digno hacia el consumidor, expresamente previsto por el art. 8 bis de la LDC y art. 1097 CCCN, debe dispensarse durante todo el desarrollo de la relación contractual, porque hace al equilibrio que resulta de las desigualdades estructurales de las relaciones de consumo. Y, en el caso de autos, los hechos verificados objetivamente demuestran que el actor sufrió un perjuicio de esta naturaleza, extendido en el tiempo, que hace procedente la reparación del daño moral.

Las circunstancias referenciadas, por sí mismas, son hábiles para producir un menoscabo de índole espiritual o moral y como tal, resarcible, al tratarse de padecimientos y contratiempos que exceden los que debieran ser ordinarios en la relación asimétrica proveedor-consumidor; lo que razonablemente se aprecia e infiere, conforme al curso natural y ordinario de las cosas, sin que por lo demás obre prueba en contrario. Es que, dada la índole del perjuicio -espiritual y subjetivo- es el derrotero presuncional el que se impone en la materia, sin que sea menester prueba directa para tener por acreditado el perjuicio.

Por lo demás, es sabido que, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias, y su responsabilidad será mayor por la confianza especial que el contratante (consumidor) deposita en él (cf. art. 1.725 CCCN). El comportamiento observado por las demandadas se muestra incompatible con el nivel de profesionalidad y expertíz con que se suponen dotadas, a la vez que violatorio de los deberes a su cargo (cf. arts. 4 y 8 bis LDC), evidenciando virtualidad para provocar al actor/consumidor una lesión de índole extrapatrimonial, que corresponde sea reparada (cf. al principio de reparación integral o plena, art. 1.740 CCCN), por su idoneidad para repercutir en su estado de ánimo, perturbando su tranquilidad de espíritu y cotidianeidad.

De lo expuesto, se concluye que cabe sostener la solución sentencial en el punto, con lo cual los agravios de las demandadas relativo a la indemnización del daño moral también se desestiman.

*(vi) Agravios sobre la procedencia y cuantía del daño punitivo*

Ambas demandadas critican la condena por daños punitivos insistiendo en la ausencia de incumplimiento de su parte, lo que -

como se ha visto- ha quedado descartado. A la vez que se agravian del monto de condena, equivalente a 12 canastas básicas en total, superando ampliamente lo peticionado en la demanda (\$800.000), por lo que entienden que el Juez a quo ha fallado ultra petita.

Para admitir la imposición de esta sanción pecuniaria, el Juez de grado consideró que "...en el presente caso la firma administradora ha vulnerado sistemáticamente el derecho a la información y al trato digno del consumidor. Ello se desprende del silencio al que se llamó a pesar de la intimación efectuada por el actor por carta documento. También surge de la presión ejercida sobre el actor para que desistiera del beneficio derivado de la medida cautelar dictada en el proceso colectivo 'Defensor del Pueblo....'. Se observa asimismo la concurrencia del elemento subjetivo en la gravísima conducta desplegada en este proceso judicial, con el incumplimiento de la medida cautelar, tal como fue valorado en los acápites precedentes. Esta conducta reprochable fue replicada por el concesionario".

En cuanto al daño causado al consumidor, valoró la privación del automóvil al que tenía derecho según los términos del contrato, durante más de dos años, a pesar de haber cumplido con las obligaciones a su cargo.

Por otro lado, hizo referencia a que "...la conducta del proveedor no aparece como un error operativo, ni negligencia excepcional, sino más bien como efectuada a sabiendas, defendida y sostenida en esta instancia judicial (y en las instancias extrajudiciales), y pasible de vulnerar o reiterarse en contra de otros clientes actuales o futuros, toda vez que la falta de cumplimiento en tiempo y forma, y en las circunstancias de nuestro país, la produce una ganancia extra, intentando sustraerse de las consecuencias de la medida cautelar entonces vigente en el proceso colectivo".

A poco que se examinan los agravios de los apelantes, se adelanta que los mismos habrán de rechazarse. Ha quedado establecido el incumplimiento contractual incurrido por las accionadas, lo que diera lugar al acogimiento de la pretensión del actor. Así también, que no resultan imputables al Sr. Santillán los incumplimientos que se le atribuyen. Tampoco asumieron las recurrentes la carga de desvirtuar los fundamentos del fallo de instancia para imponer esta sanción, limitándose a negar su responsabilidad en el caso, con sustento en lo cual pretenden infructuosamente se deje sin efecto la multa.

Recuérdese que en base a las constancias de autos, a partir de la corroboración de autenticidad de las cartas documento remitidas por el Sr. Santillán en procura de solucionar la situación de incumplimiento contractual que finalmente dio lugar a este litigio, ha quedado evidenciado que el consumidor se vio expuesto a un trato indigno, sin recibir información adecuada ni una respuesta concreta y oportuna a sus reclamos basados en las condiciones pactadas e incumplidas. Ninguna propuesta seria se ha verificado en instancias administrativa o judicial, dejando al consumidor desamparado, optando las accionadas -en lugar de asumir un comportamiento diligente y acorde a su



profesionalidad- por responsabilizar al consumidor atribuyéndole pretensos incumplimientos que -insisto- no le son imputables. Todo lo cual hace pertinente imponer una multa de tipo sancionatorio de la conducta desplegada, y a la vez para evitar -disuadir- que situaciones similares sigan aconteciendo en perjuicio de otros consumidores en las mismas condiciones (cc. CCCC, Sala I, “Atay, Sandra Viviana y Otro c. FCA S.A. de ahorro para fines determinados s/ mediación”, Sent. del 30/10/2020). Conforme arts. 52 bis, 8 bis LDC, 1.097 CCCN y cc.

Por lo demás, no puede soslayarse -como prueba indiciaria- el contenido del informe remitido en fecha 09/11/2022 por la Dirección de Comercio Interior, que da cuenta del inicio en esa repartición -desde el año 2015- de 141 denuncias contra la firma Gemsa Automotores S.A. y 209 contra la firma Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados; adjuntando el Expte. Administrativo n° 4695/311-D-2021 caratulado “Santillan, Máximo Fernando c/Gemsa Automotores S.A. y Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados”, en cuyo marco se dictó la Resolución n° 972-311-DCI-22 de fecha 04/05/2022 que impuso a Chevrolet S.A. De Ahorro Para Fines Determinados una sanción de multa de \$40.000 por resultar acreditada la infracción al art. 19 de la LDC por no haber notificado de manera fehaciente al aquí actor el acto de Adjudicación prevista en la cláusula n° 10.3 del contrato de adhesión..

Es así que, a efectos de desalentar este tipo de prácticas, resulta oportuna la condena por daño punitivo. En lo restante, cabe remitirse a lo expuesto en torno al complejo contractual a partir del cual surge la responsabilidad solidaria de las demandadas, que alcanza por igual a la administradora y a la concesionaria intervinientes en la operatoria.

En mérito a ello se rechazan los agravios de las demandadas y se confirma la sentencia de grado en cuanto dispuso aplicarles la mentada sanción civil.

Finalmente, en lo tocante al quantum de la multa aplicada, sobre el que también se agravan las coaccionadas, el Tribunal pondera que la cuantificación del daño punitivo no tiene un parámetro económico fijo, sino que están sujetos a la determinación del juzgador, con base en las pautas y límites establecidos en los artículos 47, 49 y 52 bis de la LDC. Sobre esta cuestión, ha dicho la doctrina que “las pautas de valoración para la graduación de la sanción por daño punitivo son muy variadas y, entre otras, enuncia: a) la gravedad de la falta (en la especie, incumplimiento del deber de información y de trato digno); b) la situación particular del dañador, especialmente en lo atinente a su fortuna personal (extremos que se infieren de su posición en el rubro automotriz); c) los beneficios procurados u obtenidos con el ilícito; d) la posición de mercado o de mayor poder del punido; d) el carácter antisocial de la conducta; e) la finalidad disuasiva futura perseguida (frente a la posibilidad cierta de que la conducta antijurídica constatada en autos se repita en relación a potenciales consumidores en idénticas o similares condiciones a las del actor, ponderando particularmente los efectos indirectos disuasivos y preventivos que pueda tener una sanción ejemplar estimulando prácticas acordes a la ley; f) la actitud ulterior del demandado, una vez descubierta

su falta (pretendieron desentenderse de la responsabilidad que les cupo en el caso, además de que Alra, en particular, omitió rendir cuentas del destino del dinero recibido); g) el número y nivel de empleados comprometidos en la conducta de mercado; i) los sentimientos heridos de la víctima, h) el desequilibrio evidenciado entre las partes de la relación -de público y notorio-; i) el mayor rigor con que debe ser valorada la conducta antijurídica del proveedor, atento a su posición dominante, profesionalidad y experiencia etc.” (Pizarro, Ramón Daniel, Daño moral, p. 530, Hammurabi, Bs.As., 2004). Pautas que el juez de grado tuvo en consideración en oportunidad de establecer el monto de la sanción (a cuyo análisis particular me remito).

En base a estas premisas y conforme a los hechos de la causa (ya señalados), estimo que la cuantía de la sanción fijada en la anterior instancia, equivalente a dos canastas básicas totales para el hogar 3 (que asciende para el período octubre/2024 a la suma de \$1.037.671,70 cf. información que surge de la página indec.gob.ar) a cargo del concesionario y de 10 canastas básicas para la administradora del plan de ahorros, no se muestra excesiva sino más bien adecuada y razonable a efectos de lograr la finalidad perseguida por la presente sanción. Ponderando asimismo la escala señalada por el art. 47 inc. b de la LDC (modificado por el art. 119 de la ley n° 27.701), encontrándose dentro de los márgenes establecidos (de 0,5 a 2.100 canastas básicas total para el hogar 3 que publica el INDEC), e independientemente de la estimación realizada de manera provisoria por el actor en su demanda (cf. agravios esgrimidos), quien sujeta su cuantificación definitiva a lo que en más o menos determine V.S. de conformidad con los límites legales fijados por el art. 47 LDC (cf. punto 12.5. del escrito introductorio).

En este último sentido, la Corte provincial tiene dicho que “Por la índole sancionatoria y ejemplificadora de su finalidad, independientemente de lo solicitado por el peticionante el monto queda sujeto a la determinación prudencial por parte del juzgador, quien cuenta con las pautas y límites establecidos en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor para la concesión y mensuración del mismo. El art. 52 bis de la LDC, establece con claridad que “(...) a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor (...)”, esto significa que el actor (consumidor) debe solicitarlo y estimar un monto. En tanto será el juez quien tiene la potestad del otorgamiento y el encargado de su mensuración tomando en consideración los parámetros que la propia norma le impone. En doctrina no se discute la potestad judicial de cuantificar el daño punitivo por encima de la estimación que hubiere realizado la parte actora. Es que, no es la parte quien determina el quantum a otorgar, sino el juez, y no teniendo en cuenta la opinión del actor, sino su propia convicción sobre el monto que realmente permitirá que el daño punitivo cumpla su función. Y ello es así pues el propio desequilibrio en la relación de consumo deja en evidencia la dificultad con que se enfrenta el consumidor -como parte débil- para cuantificar el daño punitivo surgida a partir de las complicaciones existentes para probar hechos y pautas de mensuración que desconoce. Es por ello que López Herrera sostiene que 'debe

tenerse sumo cuidado en la consideración de las estimaciones que realiza la actora, ya que la posibilidad de cargar costas influirá en los montos reclamados, lo que puede constituir un estímulo negativo para su petición y consecuentemente para la aplicación de la figura.' (López Herrera, Edgardo, 'Los Daños Punitivos', cit., pág 373). Más allá de lo expuesto, y en relación a si el monto debe ser objeto de la pretensión del actor o si corresponde al juez fijarlo independientemente de lo requerido por el actor, Álvarez Larrondo ha señalado de manera elocuente que 'Es claro que al no ser éste un rubro indemnizatorio sino una sanción de carácter preventivo impuesta por el Magistrado interviniente, el consumidor no puede ni debe mensurar dicho rubro, y de hacerlo, el Juez en modo alguno quedará limitado por dicha petición' (Álvarez Larrondo, Federico M; 'Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación', La Ley, 29/11/2010). En la misma línea, el Tercer Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores (Bs.As., 23 a 25 de septiembre de 2010) ha despachado unánimemente por su Comisión 5° ('Principio de prevención. Daños punitivos'), de lege lata y de manera unánime, que 'El consumidor no debe mensurar el daño punitivo al tiempo de su petición, por cuanto su imposición ha sido atribuida exclusivamente al magistrado en cumplimiento de una manda constitucional (art. 42 C. Nac.)' (CSJT, Sentencia n° 1896 del 11/12/2018, "Muler German Esteban c/ Telecom Personal S.A. s/ daños y perjuicios").

En mérito a ello, se rechazan los agravios de apelación, confirmándose el monto fijado por la sentencia de grado en concepto de daño punitivo.

*(v) Agravios sobre las costas*

Finalmente, agravia al actor las costas del proceso impuestas por la sentencia en recurso, por no haberse discriminado que se trata de una acción compleja, que incluye una primera acción de cumplimiento contractual que prosperó en un 100%, y una segunda por los daños y perjuicios provocados que también prosperó en su totalidad si se tiene en cuenta que la accionada Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados fue condenada por la multa contractual. Cuestiona, asimismo, que no se haya especificado el porcentaje de condena en costas a su parte por el rubro que no prosperó.

Por otro lado, si bien la recurrente Gemsa Automotores S.A. también apela la sentencia de grado respecto a la imposición de costas, la queja se fundamenta únicamente en que la misma se hizo en proporción al éxito objetivo de las partes y sin tener en consideración que el actor estaba en mora. Una vez más, el extremo en el que se funda este agravio no resulta atendible en mérito a la confirmación de la sentencia de grado en el punto.

Aclarado ello, en lo tocante al rubro -daño material- que no prosperó, tengo que el actor solicitó en su demanda (puntos 12.I. y 13) que se cumpla con la entrega del vehículo Chevrolet ONIX Plus 1.2 LS modelo agosto del año 2021 (cf. fecha del sorteo de adjudicación el 08/07/2021) y se congele el precio final del mismo al valor del mes de agosto de ese año; con la alternativa, para el caso que las accionadas no dispongan del vehículo antes

mencionado, de entregar un vehículo Chevrolet ONIX Plus 1.2, LS modelo 2022, más la compensación que se determine entre el porcentaje diferencial del vehículo que le habría sido adjudicado en agosto del año 2021 con respecto al valor actual del vehículo mencionado (véase los puntos 12.I. y 13 del escrito introductorio).

El Juez de grado, al desestimar la pretensión relativa al congelamiento del precio equivalente al valor móvil vigente en el mes de agosto de 2021, tuvo en consideración que “lo requerido por el actor pondría en jaque el funcionamiento de todo el grupo, puesto que la cuota que abona -de acuerdo a como fue diseñado el sistema- sirve para que el resto de los adherentes -los no adjudicados- puedan obtener el deseado bien, el cual han tenido en vista al momento de contratar”. A su vez, considera innecesario analizar el requerimiento de entrega de un modelo 2021 o 2022, en tanto los términos del contrato refieren a un auto nuevo, sumado a que debe continuar abonando las cuotas de acuerdo al valor móvil del bien tipo.” En función de todo ello, la sentencia en recurso impone las costas del rubro rechazado al actor, entendiendo que se configura la excepción prevista por el art. 487 CPCCT, en tanto no contaba con razón probable para litigar por contraponerse la pretensión rechazada con las cláusulas contractuales.

Sentado ello, aún teniendo en cuenta el rechazo de la partida privación de uso como rubro autónomo (cf. lo resuelto en esta instancia), considero que la trascendencia del progreso de la acción del actor resulta significativamente mayor, habiendo sido determinada la responsabilidad de las demandadas y admitido el progreso de las restantes pretensiones (entrega del vehículo, aplicación de la multa contractual, daño moral y daño punitivo). Por lo que, independientemente del rechazo del reclamo del actor (daño material) tenido en cuenta por el Juez de grado para la distribución de las costas y en atención a los principios que rigen la materia, corresponde modificar la sentencia de instancia e imponerlas en su totalidad a las accionadas vencidas (cf. art. 61 y 487 CPCCT).

En este sentido, contrariamente a lo sostenido por el a quo, observo que el actor pudo tener razones valederas para peticionar como lo hizo en función del tiempo transcurrido desde la celebración del sorteo en que salió adjudicado (08/07/2021), en el contexto económico e inflacionario que atraviesa nuestro país (de público y notorio). A lo que se agrega que, en su caso, las pretensiones que no prosperaron en concepto de daño material y privación de uso, resultan -por lo demás- comprendidas y suficientemente satisfechas con la aplicación de la multa contractual, también pretendida y acogida; en tanto todas ellas tienen por fundamento y finalidad la compensación del perjuicio económico ocasionado por la falta de entrega en término del vehículo adjudicado; motivo por el cual -reitero- no progresaron como rubros autónomos e independientes de aquella multa.

En consecuencia, no surgiendo configurada en el caso la excepción prevista por el art. 487 CPCCT, se recepta el recurso de la parte actora en cuanto a la imposición de costas a su parte por los rubros que no prosperan, correspondiendo sean impuestas en su totalidad a las accionadas (cf. norma procesal citada). Siendo, por lo demás, la interpretación que mejor se adecua

al régimen tuitivo y protectorio de los consumidores (art. 42 CN, en cc. arts. 3 LDC y 1094 CCCN) y el principio de reparación plena e integral (art. 1740 CCCN).

Por último, en lo tocante al agravio del actor relativo a la falta de tratamiento en la sentencia del apercibimiento decretado a la perito Julieta Alborno, se evidencia que no resulta ser ésta la vía ni la etapa procesal oportuna para su tratamiento, por lo que no corresponde su consideración.

**5. Costas de la alzada.**

Si bien el actor resultó parcialmente vencido en los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas, corresponde eximirlo del pago de las costas de esta instancia, que se imponen en su totalidad a aquellas. Todo ello de conformidad con lo dispuesto por el art. 487 CPCCT.

Por las razones expresadas, a la PRIMERA CUESTIÓN me pronuncio por la negativa.

**A la MISMA CUESTIÓN, la Sra. Vocal, Dra. MARCELA FABIANA RUIZ, dijo:**

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el Sr. Vocal preopinante, me adhiero a los mismos, votando en igual sentido.

**A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Vocal, Dr. ÁLVARO ZAMORANO, dijo:**

Por todo lo antes expuesto, es que propongo al acuerdo: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en fecha 06/02/2024 por el letrado Patricio Torres, en representación del actor, y parcialmente a los recursos de apelación deducidos en fecha 16/02/2024 por los letrados Gladys Noemi Navas y Sebastián Casanova, en el carácter de apoderados de Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados y de Gemsa Automotores S.A., respectivamente, en contra de la sentencia n° 0010 dictada en fecha 14/12/2023 por el Juzgado Civil y Comercial Común de la IV° Nominación. En consecuencia, modificar el punto I) del decisorio, disponiendo en sustitutiva el siguiente: "HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda promovida por Máximo Fernando Santillán, D.N.I. N° 31.323.310, contra CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y GEMSA AUTOMOTORES S.A. En consecuencia, CONDENAR a las demandadas a: a) hacer entrega de un vehículo Chevrolet ONIX Plus 1.2 LS -u otro de similares características-, debiendo ambas partes ajustarse estrictamente a las condiciones establecidas en el contrato oportunamente celebrado. Para ello, las demandadas deberán presentar la documentación necesaria para que el actor pueda cumplir con los deberes a su cargo; b) abonar una indemnización de \$200.000 (pesos doscientos mil). Todo ello con más intereses, de la forma considerada"; y el punto VI (rectus IV), que quedará redactado de la siguiente manera: "COSTAS a las demandadas vencidas (cf. art. 61 CPCCT)".

Así lo voto.

**A la MISMA CUESTIÓN, la Sra. Vocal, Dra. MARCELA FABIANA RUIZ, dijo:**

Compartiendo la resolución propuesta, voto en igual sentido.

Con lo que se da por concluido este acuerdo.

*La presente sentencia es dictada por dos miembros del Tribunal, por existir coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (art. 23 bis, LOPJ, texto incorporado por ley N° 8481).*

**Y VISTOS:** Por los fundamentos del acuerdo precedente, se:

**RESUELVE:**

**I. HACER LUGAR** al recurso de apelación deducido en fecha 06/02/2024 por el letrado Patricio Torres, en representación del actor, en contra de la sentencia n° 0010 dictada en fecha 14/12/2023 por el Juzgado Civil y Comercial Común de la IV° Nominación, por lo considerado.

**II. HACER LUGAR PARCIALMENTE** al recurso de apelación interpuesto en fecha 16/02/2024 por la letrada Gladys Noemi Navas, en el carácter de apoderada de Chevrolet SA De Ahorro Para Fines Determinados, en contra de la sentencia n° 0010 dictada en fecha 14/12/2023 por el Juzgado Civil y Comercial Común de la IV° Nominación, por lo ponderado.

**III. HACER LUGAR PARCIALMENTE** al recurso de apelación interpuesto el 16/02/2024 por el letrado Sebastián Casanova, en el carácter de apoderado de Gamsa Automotores S.A., en contra de la sentencia n° 0010 dictada en fecha 14/12/2023 por el Juzgado Civil y Comercial Común de la IV° Nominación, por lo valorado.

**IV.** En consecuencia, **MODIFICAR** el punto I) de la sentencia n° 0010 dictada en fecha 14/12/2023 por el Juzgado Civil y Comercial Común de la IV° Nominación, disponiendo en sustitutiva el siguiente: “HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda promovida por Máximo Fernando Santillán, D.N.I. N° 31.323.310, contra CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y GEMSA AUTOMOTORES S.A. En consecuencia, CONDENAR a las demandadas a: a) hacer entrega de un vehículo Chevrolet ONIX Plus 1.2 LS -u otro de similares características-, debiendo ambas partes ajustarse estrictamente a las condiciones establecidas en el contrato oportunamente celebrado. Para ello, las demandadas deberán presentar la documentación necesaria para que el actor pueda cumplir con los deberes a su cargo; b) abonar una indemnización de \$200.000 (pesos doscientos mil). Todo ello con más intereses, de la forma considerada”; y el punto VI (rectus IV) del referido decisorio, que quedará redactado de la siguiente manera: “COSTAS a las demandadas vencidas (cf. art. 61 CPCCT)”.

**V. COSTAS** de la Alzada, como se consideran.

**VI. HONORARIOS** en su oportunidad.

**HÁGASE SABER**

ÁLVARO ZAMORANO

MARCELA FABIANA RUIZ

Ante mí:

FEDRA E. LAGO

NRO.SENT: 74 - FECHA SENT: 06/03/2025

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=RUIZ Marcela Fabiana, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27223364247, Fecha:06/03/2025;CN=ZAMORANO Alvaro, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 23223361579, Fecha:06/03/2025;CN=LAGO Fedra Edith, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27206925375, Fecha: 06/03/2025;  
La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>